

RELATORÍA JURÍDICA ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Lunes 05 de Enero de 2015

Cali

Explican bajo qué parámetros procede la acción de nulidad en contra de una licencia de construcción

La licencia de construcción es un acto de contenido particular y concreto, ya que genera efectos vinculantes a particulares determinados, así lo recordó la Sección Primera del Consejo de Estado. Sin embargo, si afecta el ordenamiento jurídico en abstracto o no se ajusta a las disposiciones urbanísticas previstas por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), es viable promover la acción de simple nulidad para garantizar el interés general, agregó.

Sobre el acto que concede una licencia de construcción, aclaró que se trata de una manifestación de la administración que otorga una autorización para desarrollar una obra privada que crea una situación jurídica concreta y vinculante para el administrado, lo que da lugar, en principio, a promover en su contra la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (C. P. Marco Antonio Velilla). (Consejo de Estado Sección Primera, Sentencia 76001233100020040280701, 8/28/2014) Noticia generada en Ene. 5/15 (11:54 a.m.)

Solo si se demuestra que se recuperó una prueba documental con posterioridad a la sentencia, prospera el recurso de revisión

Para que prospere la segunda causal de revisión del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), subrogado por el artículo 41 del Decreto 2304 de 1989, la Sección Segunda del Consejo de Estado recordó que se debe demostrar que se recuperó una prueba documental con posterioridad a la sentencia, es decir que ahora se tiene “algo” que antes no se poseía.

Adicional a esto, el medio probatorio debe guardar relación directa con la decisión (de haber sido aportada habría incidido en el resultado). Finalmente, advirtió que la ausencia de tales documentos no puede obedecer a inactividad del demandante, sino a circunstancias en las que

se constate que operó fuerza mayor, caso fortuito o el obrar de la contraparte (C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren). (Consejo de Estado Sección Segunda, Sentencia 11001031500020090041500, 9/30/2014) Noticia generada en Ene. 5/15 (3:19 p.m.)

La desvinculación de un trabajador oficial puede ser injusta aunque sea legal

Según la Corte Suprema de Justicia, pese a ser legal el despido de trabajadores oficiales por la clausura o liquidación de una entidad estatal, esa calificación no implica que la desvinculación del trabajador esté amparada en una justa causa, pues tal motivo no está contemplado dentro de lo establecido en el Decreto 2127 de 1945, en el que se describe, de manera taxativa, las condiciones consideradas como justas para dar por terminado unilateralmente un contrato de trabajo.

Por eso, el alto tribunal recordó la diferenciación entre el despido autorizado legalmente y el despido con justa causa, y aclaró que no siempre el primero obedece a uno de esos determinados motivos específicos que sirven de fundamento a la extinción unilateral del contrato y que se denominan “justas causas”, como son, frente al trabajador oficial, las que establecen los artículos 16, 48 y 49 del mencionado decreto.

La Sala Laboral advirtió que la extinción jurídica de una empresa autoriza plenamente la terminación del contrato de trabajo, de ahí que la ley lo consagre como un motivo de finalización del vínculo laboral, pero que no impide el surgimiento de algunos derechos para el trabajador, como la pensión restringida de jubilación (M. P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo). (Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, Sentencia SL-16150 (52926), 11/5/2014) Noticia generada en Ene. 5/15 (1:51 p.m.)

Corte Constitucional recuerda el contenido del derecho fundamental al agua

La Corte Constitucional recordó que dada la importancia del agua y su protección reforzada a nivel constitucional, en diversas oportunidades ha reconocido que el derecho al agua es un derecho fundamental. Según la corporación, el contenido de este derecho ha sido precisado como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

Así las cosas, explicó que en lo que respecta a la cantidad disponible de agua, debe entenderse que dicho concepto implica el estar acorde con las necesidades especiales de algunas personas derivadas de sus condiciones de salud, del clima en el que viven y de las condiciones de trabajo, entre otros, mientras que la exigencia de calidad del agua se relaciona con la salubridad del recurso.

Para el alto tribunal, la accesibilidad y la asequibilidad tienen que ver con la posibilidad de acceder al agua sin discriminación alguna, la factibilidad de contar con instalaciones adecuadas y necesarias para la prestación del servicio de acueducto, la obligación de remover cualquier barrera física o económica que impida el acceso al agua, especialmente de los más pobres y los grupos históricamente marginados, y el acceso a información relevante sobre cuestiones de agua.

Finalmente, explicó que la aceptabilidad hace referencia a la necesidad de que las instalaciones y los servicios de provisión de agua sean culturalmente apropiados y sensibles a cuestiones de género e intimidad, entre otras. (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) (Corte Constitucional, Sentencia T-790, 10/23/2014) Noticia generada en Ene. 2/15 (11:42 a.m.)

Defecto fáctico como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional en diferentes pronunciamientos ha determinado el alcance del defecto fáctico como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, estableciendo que éste se presenta, entre otras razones:

i) Cuando existe una omisión en el decreto de pruebas que eran necesarias en el proceso, ii) cuando se da una valoración caprichosa o arbitraria a las pruebas existentes, o iii) cuando no se valora en su integridad el acervo probatorio.

Dentro de las conductas que configuran el defecto fáctico se encuentran: i) defecto fáctico por omisión: cuando el juez se niega a dar por probado un hecho que aparece en el proceso, lo que se origina porque el funcionario: a) niega, ignora o no valora las pruebas solicitadas y b) tiene la facultad de decretar la prueba y no lo hace por razones injustificadas; y ii) defecto fáctico por acción: se da cuando a pesar de que las pruebas reposan en el proceso, hay: a) una errónea interpretación de ellas, bien sea porque se da por probado un hecho que

no aparece en el proceso, o porque se estudia de manera incompleta, b) cuando las valoró siendo ineptas o ilegales, o c) fueron indebidamente practicadas o recaudadas, vulnerando el debido proceso y el derecho de defensa de la contraparte; entonces, es aquí cuando entra el juez constitucional a evaluar si en el marco de la sana crítica, la autoridad judicial desconoció la realidad probatoria del proceso; sin embargo, en esta misión el administrador de justicia no puede convertirse en una instancia que revise el análisis probatorio que realiza el juez ordinario, pues ello sería contrario al carácter subsidiario de la acción de tutela e implicaría invadir la competencia y la autonomía de las otras jurisdicciones.

Corte Constitucional- Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB- Bogotá D.C., dos (2) de septiembre de dos mil catorce (2014) Sentencia T-629

Corresponde a las partes asumir la carga procesal de impulsar el litigio para garantizar la seguridad jurídica

En relación con esa figura jurídico procesal, esta Sección del Consejo de Estado, en forma reiterada, ha sostenido que la misma ha sido instituida para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales frente a aquellos eventos en los cuales determinadas acciones judiciales no se ejercen dentro de un término específico.

Así pues, corresponde a las partes asumir la carga procesal de impulsar el litigio dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si no se hace en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

De conformidad con el anterior criterio jurisprudencial, para la Sala, la regla general, consiste en que el término de caducidad, según el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., debe iniciarse a contabilizar a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho que originó el daño y, única y exclusivamente, en aquellos casos en los cuales el conocimiento, concreción o magnitud del daño padecido ocurre con posterioridad, será desde este último instante –y no más allá- en que se computará el término de caducidad.

Consejo de Estado- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA – SUBSECCION A- Demandante: Mario Flórez Picón y otros Demandado: Instituto de Seguros Sociales- CONSEJERO PONENTE: HERNÁN ANDRADE RINCÓN (E) Bogotá, D.C., diez (10) de

Causales de revocación de los actos administrativos dispuesto en el artículo 69 del código contencioso administrativo

En nuestro ordenamiento contencioso la revocatoria directa está concebida como una prerrogativa de control de la misma administración sobre sus actos que le permite volver a decidir sobre asuntos ya decididos en procura de corregir en forma directa o a petición de parte, las actuaciones lesivas de la constitucionalidad, de la legalidad, o de derechos fundamentales.

Dispone el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo como causales de revocación de los actos, las siguientes: cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley; cuando no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él; cuando con ellos se cause un agravio injustificado a una persona.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "A"- Actor: RAFAEL DE JESUS GOMEZ QUIÑONES Demandado: CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN E.I.C.E. EN LIQUIDACION HOY UGPP- Consejero Ponente: GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN- Bogotá, D.C., primero (1) de septiembre de dos mil catorce (2014). Radicación No: 250002325000 2009 00128-02 (1163-2013)

Privar a un paciente de oportunidades de curación o supervivencia genera responsabilidad

La pérdida de la oportunidad, además de constituir un perjuicio independiente, se estudia y se define desde la imputación fáctica como el elemento que permite imputar daños, a partir de la aplicación concreta de estadísticas y probabilidades en cuanto a las potencialidades de mejoramiento que tenía la persona frente a un determinado procedimiento u obligación médica que fue omitida o ejecutada tardíamente.

Así lo señaló por el Consejo de Estado en un caso en el que determinó que mantener a un paciente con politraumatismos en un hospital de segundo nivel constituyó la pérdida de la oportunidad que tenía de

recibir una mejor atención y un tratamiento oportuno para preservar su vida.

Según la corporación, aunque el tratamiento que recibió el paciente para su estabilización y las medicinas suministradas fueron las adecuadas de conformidad con los protocolos médicos, el ostensible pronóstico de su evolución que restaba posibilidades de sobrevivencia hacía carente de sentido la observación del paciente sin los exámenes conducentes para determinar la magnitud de la lesión que sufría.

En ese sentido, sostuvo que la pérdida de oportunidad, para estos eventos, sirve como un instrumento de imputación, porque aun cuando no existe certeza de que la falla en la prestación del servicio médico ha sido la causa del resultado dañoso, es posible demostrar que ha causado el cercenamiento de obtener un resultado favorable o evitar un perjuicio, lo que, a juicio del alto tribunal, genera responsabilidad estatal (C. P. Enrique Gil Botero). (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 05001233100019950011401 (29595), 11/12/2014)
Noticia generada en Ene. 2/15 (8:46 a.m.)

Recuerdan cómo calcular el monto de la pensión de jubilación para empleados oficiales en régimen de transición

El Consejo de Estado recordó que el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, que reguló el régimen prestacional de todos los empleados oficiales antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, dispuso que la pensión de jubilación que se reconozca de acuerdo con sus disposiciones será equivalente al 75 % del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

Así mismo, indicó que la modificación realizada por la Ley 62 de 1985 sobre el artículo 3º enlistó los factores salariales sobre los cuales debe calcularse la referida prestación, tales como la asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio y agregó que las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes.

Sin embargo, reiteró que con base en la línea jurisprudencial unificada de la corporación, no puede entenderse en forma taxativa que los

factores salariales allí enunciados son los únicos que conforman la base de liquidación pensional, por lo que no puede impedirse la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.

A su juicio, restringirlos trae como consecuencia la regresividad en los derechos sociales de los ciudadanos y el desconocimiento de los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral (C. P. Bertha Lucía Ramírez De Páez). (Consejo de Estado Sección Segunda, Sentencia 73001233300020130007901 (44952013), 10/23/2014) Noticia generada en Ene. 2/15 (10:56 a.m.)

Recomendaciones del Ministerio del Trabajo frente a las situaciones de acoso laboral

La Ley dispone que cuando el acoso laboral está debidamente acreditado se sancionará como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único, cuando su autor sea un servidor público.

Se considera maltrato laboral, todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.

Entre las medidas preventivas, se establece la formulación de una política clara dirigida a prevenir el acoso laboral que incluya el compromiso, por parte del empleador y de los trabajadores. Igualmente, elaborar códigos o manuales de convivencia, en los que se identifiquen los tipos de comportamiento aceptables en la empresa.

Así mismo, realizar actividades de sensibilización sobre acoso laboral y sus consecuencias; ejecutar actividades de capacitación sobre resolución de conflictos y desarrollo de habilidades sociales; efectuar seguimiento y vigilancia periódica del acoso laboral utilizando instrumentos que para el efecto hayan sido validados en el país, garantizando la confidencialidad de la información.

MINISTERIO DE TRABAJO- Diciembre 29 de 2014- Comunicado de prensa

Iluminación en zonas comunes de unidades inmobiliarias se realiza a través del servicio público domiciliario de energía

El servicio de alumbrado público se presta respecto a los bienes de uso público y se financia a través del recaudo del impuesto municipal o distrital correspondiente, mientras que la iluminación en zonas comunes de las unidades inmobiliarias sometidas al régimen de propiedad horizontal se realiza a través de la prestación del servicio público domiciliario de energía, cuya tarifa debe ser asumida por los copropietarios de las mismas, indicó la Superintendencia de Servicios Públicos.

De otra parte, señaló que un inmueble no puede tener la calidad de bien de uso público y a la vez ser zona común de la unidad inmobiliaria sujeta al régimen de propiedad horizontal, pero en la factura a través de la cual se cobre el servicio público domiciliario de energía se puede cobrar lo correspondiente al impuesto de alumbrado público, para la iluminación de los bienes de uso público del municipio o distrito donde esté ubicada la unidad.

(Superservicios, Concepto 985, 11/27/2014)- Noticia generada en Ene. 2/15 (10:53 a.m.)

Martes 13 de Enero de 2015

Reiteran cálculo del término para que proceda la perención en materia administrativa

Quien acude ante la jurisdicción contencioso administrativa en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debe tener pleno conocimiento de que el pago de la caución es un aspecto procesal que debe cumplirse, recordó el Consejo de Estado.

En consecuencia, el derecho de acceso a la administración de justicia no se desconoce cuándo se decreta la perención del proceso por la inactividad de la demandante, concretamente porque deja transcurrir más de seis meses sin constituir la caución ordenada en el auto admisorio de la demanda.

No obstante, la corporación recordó que el término para que proceda su decreto debe contarse desde la notificación del último auto, desde el día

de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al Ministerio Público. Por eso, si el demandante ha presentado ante el juzgador la solicitud de amparo de pobreza para pasar por alto la obligación de constituir la garantía, el término de la perención debe contarse a partir de la providencia en la que se dio respuesta a la petición.

(C. P. Martha Teresa Briceño De Valencia) (Consejo de Estado Sección Cuarta, Auto 25000232700020110029101 (20098), 11/20/2014) Noticia generada en Ene. 9/15 (2:09 p.m.)

Aclaran caducidad de acción de grupo contra acto administrativo, ante vigencia de Ley 1437 del 2011

La Corte Constitucional recordó que el Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 2011) solo aplica a las situaciones nuevas, nacidas luego de su entrada en vigor, ya que la ley anterior mantiene su obligatoriedad para las actuaciones en curso, independientemente del momento en que culminen.

En ese sentido, la Ley 1437 introdujo un nuevo término de caducidad (cuatro meses) aplicable a la interposición de la acción de grupo contra actos administrativos, distinto al contemplado en la Ley 472 de 1998, norma especial que la regula. Justamente, bajo la Ley 472, ese lapso es de dos años contado a partir de la fecha en que se causó el daño o cesó la vulneración, por lo cual tal acción deberá promoverse según esta disposición, si el acto administrativo fue notificado antes de la vigencia de la Ley 1437, afirmó el alto tribunal

(M. P. Jorge Pretelt). (Corte Constitucional, Sentencia T-869, 11/13/2014) Noticia generada en Ene. 9/15 (2:00 p.m.)

Recuerdan requisitos para que la acumulación subjetiva de pretensiones no conduzca a un fallo inhibitorio

Según el Consejo de Estado, acumular en una demanda pretensiones contra dos demandados con fundamento en los contratos que celebró con cada uno de ellos configura una acumulación subjetiva de pretensiones.

Esta clase de acumulación exige para su procedencia que provengan de la misma causa, que versen sobre el mismo objeto, que se hallen en relación de dependencia o que deban servirse de unas mismas pruebas, recordó el alto tribunal.

Por eso, sostuvo que cuando en una misma demanda, desarrollada bajo las normas del Código Contencioso Administrativo, el accionante pretende que se declare el incumplimiento de dos personas jurídicas diferentes con base en dos contratos estatales, se plantean solicitudes que ameritaban encausarse en procesos por separado, y como el juzgador no puede escoger pronunciarse sobre una sola situación, no queda otro camino que la inhibición

(C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa). (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 52001233100019990052001 (27646), 11/12/2014) Noticia generada en Ene. 9/15 (10:34 a.m.)

El recurso extraordinario de revisión rompe el principio de cosa juzgada: Consejo de Estado

El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas, y únicamente por las causales específicamente instituidas en la ley como un medio de justicia que habilita para romper el carácter de firme e inmutable de que se hallan revestidas con efectos de cosa juzgada.

Así lo recordó el Consejo de Estado, al explicar que el principio de cosa juzgada no es absoluto, cuando por razones de justicia se deben exceptuar de él las providencias de fondo injustas.

En ese orden, reiteró que la revisión es procedente contra las sentencias en que están fundadas en documentos falsos o adulterados o cuando con posterioridad a su emisión una de las partes recobró documentos decisivos que no pudieron aportarse al proceso por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente.

Igualmente, sostuvo que su aplicación sobreviene cuando se ha dictado una sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento, cuando existe nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación, cuando se ha dictado sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición y,

finalmente, por ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada

(C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren). Noticia generada en Ene. 9/15 (9:51 a.m.)

Aclaran cuándo es exigible el derecho a la vivienda digna por vía de tutela de potenciales beneficiarios de proyecto de vivienda

Cuando un proyecto de vivienda e interés prioritario en gestación no supera la etapa preliminar como consecuencia de la imposibilidad de destinar el predio postulado, las personas que han sido censadas y se encuentran identificadas como objeto de priorización con posibilidad de beneficiarse del proyecto no cuentan con ninguna situación jurídica, derecho o expectativa que pueda ser objeto de protección por vía de tutela.

Con este argumento, el Consejo de Estado negó la protección de los derechos a la vivienda digna, debido proceso e igualdad de dos desplazadas y madres de escasos recursos que pretendían la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad sobre la norma que sustentó la suspensión del proyecto de vivienda para el cual habían sido censadas como posibles beneficiarias.

Según la corporación, solamente hasta que se designen finalmente, previa verificación de los requisitos correspondientes, las personas destinatarias del subsidio, el derecho a la vivienda digna podrá ser exigible por vía de tutela, así como también los derechos a la igualdad y debido proceso (C. P. Maria Elizabeth García González). Noticia generada en Ene. 8/15 (11:15 a.m.)

Contralorías territoriales tienen autonomía administrativa y presupuestal, pero no gozan de personería jurídica

La Corporación explicó que de acuerdo con lo señalado en el artículo 272 de la Constitución Política, “se desprende que las entidades territoriales cuentan con la posibilidad de tener contralorías dentro de su estructura, y que esas entidades cuentan con autonomía administrativa y presupuestal, pero no gozan de personería jurídica”.

Indicó que en la sentencia de la Corte Constitucional C-643 de 2012, “se fijó el alcance de la autonomía presupuestal de las contralorías

territoriales, sin que pueda inferirse que por ello se les haya concedido personería jurídica, dado que la misma subyace en la entidad a la cual pertenecen a efectos de ser representadas judicialmente, tal y como se expresó en la providencia del Consejo de Estado que se transcribió parcialmente” (1729-01 de 2003).

El Despacho confirmó la decisión del Tribunal Administrativo del Huila en cuanto desestimó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el apoderado del Departamento del Huila respecto a la demanda instaurada por Amanda Cecilia Londoño que pedía la nulidad de actos relacionados con un proceso de responsabilidad fiscal. Consejo de Estado CE-SEC1-EXP2014-N00131-01 Nulidad-Restab 2014/10/09

Gobierno define prioridades de inversión de contribución destinada a infraestructura educativa

Con fundamento en el artículo 143 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1450/11), que autorizó al Gobierno para destinar la contribución a cargo de la Nación y los entes territoriales prevista en la Ley 21 de 1982 para infraestructura educativa, el Ministerio de Educación definió los criterios para su inversión, estableció el procedimiento para obtener la cofinanciación de proyectos de infraestructura educativa y derogó la Resolución 7650 del 2011.

Según la Resolución 0200 del 2015, se financiarán proyectos que estén orientados a la implementación de la jornada única escolar y que cumplan con requisitos, tales como la integración de dos o más sedes educativas en un solo proyecto, la construcción de nuevas aulas escolares y mejoramiento de las condiciones mínimas de las instituciones educativas. También se les dará prioridad a establecimientos oficiales afectados por emergencias, desastres naturales, actos violentos y/o situaciones antrópicas. (Mineducación, Resolución 0200, 1/5/2015) Noticia generada en Ene. 9/15 (9:36 a.m.)

Mediante fallo de única instancia, Procuraduría absolvió a exalcalde de Santiago de Cali (Valle del Cauca)

“La Procuraduría General de la Nación, en decisión de única instancia, absolvió de toda responsabilidad disciplinaria al señor Jorge Iván Ospina Gómez, en su calidad de alcalde municipal del municipio de Cali (Valle del Cauca), con relación a varios convenios interadministrativos

suscritos con la Empresa Municipal de Renovación Urbana (EMRU) para la ejecución de 21 megaproyectos en el citado municipio.

Igualmente absolvió a los señores Marco Aníbal Zambrano Solarte, en su condición de secretario municipal de infraestructura y valorización de Cali; Luis Eduardo Barrera Vergara, en su calidad de gerente encargado de la empresa de Renovación Urbana de Cali- EMRU; Yecid Genaro Cruz Ramírez, gerente encargado de la empresa de Renovación Urbana de Cali - EMRU y a Elmer Fabio García Rojas, subsecretario de apoyo técnico de la Secretaría de Infraestructura y Valorización e interventor de los convenios objeto de investigación.” Procuraduría--Comunicado--2015-N

Vencido seis años, empleado de carrera no podrá desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción o de período

La Corporación declaró la nulidad del párrafo “Superado el término señalado en el inciso anterior, al empleado público de carrera administrativa se le podrán conceder nuevas comisiones para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción o de período, para lo cual se podrá tomar la calificación en los términos del artículo 38 de la Ley 909 de 2004, la calificación en el empleo de libre nombramiento y remoción o los resultados del Acuerdo de Gestión del último período evaluado del cargo ocupado en comisión, los cuales deben ser satisfactorios”, contenido en el artículo 1 del Decreto 2809 de 2010, expedido por el Presidente de la República.

Indicó la Sala que el aparte del Decreto acusado al “conceder nuevas comisiones para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción o de periodo una vez vencido el termino máximo de los seis (6) años, excede la potestad reglamentaria conferida al Presidente de la República”.

Enfatizó que la “regla general es que los empleos en los órganos y entidades del Estado deben proveerse por el sistema de carrera, no solo por los méritos de quienes aspiran, sino además por la vocación de permanencia de quienes ingresan, situación que beneficia a la Entidad al contar con personal altamente calificado y conocedor de la Institución”. Consejo de Estado CE-SEC2-EXP2014-N00191-11 (00066-00) Nulidad-Simple 2014/05/15

El juez disciplinario olvido realizar la imputación fáctica y omitió señalar la modalidad de las conductas

La Sala procedió a declarar la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso donde se sanciona a togada por incurrir en la conducta de no rendir, a la menor brevedad posible, a quien corresponda, las cuentas o informes de la gestión o manejo de los bienes cuya guarda, disposición o administración le hayan sido confiados por virtud del mandato, o con ocasión del mismo, al encontrar que en el caso en conocimiento no se realizó la imputación fáctica y se omitió señalar la modalidad de las conductas, siempre y cuando al juez disciplinario, a tiempo de expedir la decisión de cargos, le asiste el deber de exponer las razones por la que estima que las normas descritas en su providencia acusatoria trascienden vulneradas, de forma tal que el implicado ejerza su derecho de defensa y de contradicción.

Ello significa que los descriptores normativos del tipo disciplinario deben ser claramente expuestos por la acusación, de modo que se explique con claridad el verbo rector contenido en el deber violado o en la prohibición en que incurrió el disciplinado, cuidando de no hacer afirmaciones indeterminadas o confusas. Empero, cuando el tipo disciplinario realizado sea de aquellos cuyo contenido recoge varios verbos rectores, el operador disciplinario habrá de explicar cuál de esos verbos contenidos en la norma escogida como violada se compadece con la acción o la omisión desplegada por el procesado.

Declaro. M.P. Wilson Ruiz Orejuela. Documento disponible al público en enero de 2015. Temas: Nulidad de lo Actuado. Disciplinario. Imputación Fáctica. Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria- Expediente 50001 11 02 000 2012 00294 01 de 2014-2014-08-27

Cuando se es comunero no hay lugar a reclamar un bien para beneficio propio sin ostentar la calidad de administrador

El querellante al no haber acreditado detentar la personaría de la comunidad por no haber sido previamente elegido como administrador del inmueble pretenso en entrega, sino que meramente al ser uno de los comuneros por cuanto tiene una cuota parte del mismo, mal podía reclamar, para sí, sobre la totalidad del aludido bien raíz, motivo por el cual se halló falto de legitimación en la causa por activa para así pedir, siendo que lo determinado en torno al asunto debatido se basa en una hermenéutica respetable «sobre reformas civiles», la que desde luego

no puede ser alterada por esta vía, todo lo cual no merece reproche desde la óptica ius fundamental para que deba originarse la inaplazable intervención del juez de amparo.

Niega. M.P. Margarita Cabello Blanco. Documento disponible al público en enero de 2015. Temas: Comuneros. Bienes Raíz. Amparos. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil Expediente 11001 02 03 000 2014 02598 00 de 2014. 2014-11-19

Jueves 15 de Enero de 2015

Recuerdan que informes de prensa como medios probatorios son solo un indicador para el juez

El Consejo de Estado recordó que con base en la actual línea jurisprudencial, los informes de prensa no tienen por sí solos la entidad suficiente para probar la existencia y veracidad de la situación que narran y/o describen, por lo que su eficacia probatoria depende de su conexidad y coincidencia con otros medios de prueba que obren en el expediente.

Según el alto tribunal, la Sala Plena de la Sección Tercera ya había indicado que “cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.) en el campo probatorio puede servir solo como un indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos”.

A juicio de la corporación, esta postura resulta acorde con la jurisprudencia interamericana, en la que se ha indicado que las notas de prensa aportadas por las partes pueden ser valoradas cuando recojan o registren hechos públicos y notorios, declaraciones de funcionarios o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso, siempre que se encuentren completos o, por lo menos, sea posible constatar su fuente, autor y fecha de publicación

(C. P. Ramiro Pazos Guerrero). (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 08001233100020000197600 (31302), 8/28/2014) Noticia generada en Ene. 14/15 (11:20 a.m.)

No pagar caución decretada en auto admisorio genera perención del proceso

Quien acude ante la jurisdicción contencioso administrativa debe tener pleno conocimiento de que el pago de la caución es un aspecto procesal que se debe cumplir cuando la ley lo exige, recordó el Consejo de Estado.

En consecuencia, el derecho de acceso a la administración de justicia no se desconoce si la perención del proceso se decreta por la inactividad de la demandante, concretamente porque deja transcurrir más de seis meses sin constituir la caución ordenada en el auto admisorio de la demanda.

Según la corporación, esta medida, que le pone fin al proceso, es aplicable a la luz del artículo 148 del Código Contencioso Administrativo cuando, por causa distinta al decreto de suspensión y por falta de impulso por parte del demandante, el proceso permanece durante seis meses en la secretaría en la primera o única instancia.

Sin embargo, el término se debe contar desde la notificación del último auto, desde el día de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al Ministerio Público, en su caso. De otro lado, precisó que en los procesos de simple nulidad no hay lugar a la perención, ni en aquellos en los que la Nación, una entidad territorial o una descentralizada hacen de demandantes.

El caso analizado

En un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la apoderada de la parte demandante apeló el auto mediante el cual se decretó la perención del proceso, porque no se constituyó la caución correspondiente al 10 % de la suma discutida, ordenada en el auto admisorio de la demanda.

El Consejo, al conocer del recurso, encontró acreditado que la demandante, en varias oportunidades, radicó memoriales en los que le manifestó al despacho la imposibilidad de constituir la póliza, como consecuencia de las constantes negativas de las compañías aseguradoras.

Además, constató que el juez de conocimiento dio respuesta a cada una de las solicitudes de la actora, advirtiéndole que la caución también se podía constituir a través de garantías dinerarias, reales o bancarias, de conformidad con el artículo 678 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante, un mes después de radicado el último memorial, el tribunal decretó la perención del proceso, aduciendo que desde la notificación del auto admisorio al Ministerio Público habían transcurrido seis meses, sin que la demandante hubiese cumplido la carga con la que se daría impulso al proceso.

Ante esto, el órgano de cierre revocó la decisión y recordó que cuando el demandante ha presentado solicitudes de aclaración sobre las formas de constituir la caución, el término para declarar la perención debe contarse a partir de la providencia en la que se dio respuesta a la petición y no desde la notificación del auto admisorio.

(Consejo de Estado, Sección Cuarta, Auto 25000232700020110029101 (20098), nov. 20/14, C. P. Martha Teresa Briceño De Valencia)

Daño por afectaciones al medio ambiente puede ser permanente y afecta caducidad de la acción de reparación directa

La Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó continuar con una demanda de reparación directa en la que se pretende declarar la responsabilidad administrativa por vertimientos de aguas residuales al río San Juan, ubicado en el municipio Sahagún (Córdoba). Para los demandantes, la construcción, adecuación y ejecución parcial de un plan maestro de alcantarillado generó contaminación al ecosistema.

Aunque el juez de instancia había decretado la caducidad de la acción, el alto tribunal señaló que cuando se trata de afectaciones al medio ambiente, la concreción de los daños puede ser histórica, instantánea, permanente, diferida, sucesiva o continuada.

En su opinión, “es ineficaz tomar como punto de inicio del término de caducidad la fecha de finalización de la construcción del alcantarillado”, pues con la sola obra de infraestructura no se concretaba el perjuicio, pues es necesario examinar qué daños ambientales y ecológicos se produjeron como consecuencia de la contaminación desencadenada por el desarrollo de la obra de infraestructura

(M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa). (Consejo de Estado Sección Tercera, Auto 23001233100020120000401 (46107), 12/10/2014) Noticia generada en Ene. 14/15 (8:00 a.m.)

La revocatoria del acto que da apertura a un proceso de selección puede generar perjuicios indemnizables

Al margen de que el acto de revocatoria sea legal, si con este se causa un daño antijurídico la administración está en la obligación de repararlo en los términos del artículo 90 constitucional y el afectado puede solicitar su protección por vía judicial, a través de la acción contenciosa administrativa que resulte procedente.

Así fue recordado por el Consejo de Estado, luego de indicar que el acto de apertura con el que se da inicio a un proceso de selección constituye una especie de policitud que realiza la administración pública para que los interesados formulen sus ofrecimientos con base en los requisitos consignados en el pliego de condiciones.

En ese sentido, sostuvo que si bien el acto de apertura del proceso de selección, en principio, no obliga, ni crea, ni modifica situaciones particulares, una vez los interesados presentan sus respectivas ofertas se genera la legítima expectativa de que su propuesta sea considerada.

A juicio del alto tribunal, en ese momento la oferta pública de la administración se particulariza porque existe una aceptación expresa de ella por parte de quienes realizan sus ofrecimientos, de manera que, a partir de ese momento, la revocatoria puede ocasionar perjuicios que resultan indemnizables (C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera). (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 76001233100019980109301 (31297), 11/26/2014) Noticia generada en Ene. 14/15 (2:25 p.m.)

Entidades estatales pueden declarar la caducidad sobre las obligaciones que surgen de un contrato de transacción

Cuando se acude a la transacción para terminar extrajudicialmente un litigio incoado en contra de una entidad pública es posible que, por el contenido de las obligaciones y la naturaleza de las prestaciones allí contraídas, se dé vida jurídica a un nuevo contrato estatal, sentenció el Consejo de Estado.

Así las cosas, la declaratoria de la caducidad continúa siendo una potestad de la entidad del Estado cuando evidencia la falta de cumplimiento sobre el nuevo objeto contractual.

Según el alto tribunal, esto es así porque las autoridades públicas gozan de potestades constitucionales y legales dirigidas al cumplimiento de sus funciones, como lo es la declaratoria de caducidad administrativa de los contratos en curso, viable cuando se presenta el incumplimiento del contratista y en orden a la satisfacción del interés general comprometido por la no realización o por la ejecución tardía o indebida del objeto contractual.

En el caso analizado, la corporación confirmó que de la transacción suscrita entre una entidad estatal y una empresa constructora para dar fin a un litigio surgieron obligaciones que dieron vida a un contrato de obra pública sobre el cual existía la obligación de pactar la cláusula de caducidad en los términos del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, o bien de entenderla incluida por no haber quedado estipulada de manera explícita

(C.P. Stella Conto Díaz del Castillo). (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 2500023260002000029701 (28042), 11/13/2014)
Noticia generada en Ene. 13/15 (11:22 a.m.)

Motivos por los cuales puede generarse la supresión del cargo de carrera administrativa

El artículo 125 Constitucional dispone que los empleos de las entidades del Estado son de Carrera Administrativa, salvo las excepciones expresamente consagradas en el Ley.

En cumplimiento del anterior precepto constitucional, el legislador expidió la Ley 443 de 1998, estableciendo que los cargos públicos deben ser provistos por personas que hayan aprobado un Concurso de Méritos, como regla general, es decir, determinó como sistema de selección de los servidores públicos las capacidades intelectuales, con la finalidad de profesionalizar la función pública, lograr una mejor prestación del servicio a los ciudadanos, aumentar la eficacia de las actuaciones administrativas, y eliminar las practicas clientelistas dentro del ámbito público.

La supresión del cargo de Carrera Administrativa puede originarse por múltiples motivos dentro de los que se encuentran: reestructuración de la planta de personal, liquidación de la entidad, reclasificación en los empleos, o simplemente por "políticas de modernización del Estado con el fin de hacer más eficaz la prestación del servicio público".

Sin embargo, todas las múltiples causas que pueden motivar la supresión de empleos de carrera deben estar encaminadas a lograr el mejoramiento de la función pública.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN "B" Actor: CIPRIANO SANDOVAL MENDOZA. AUTORIDADES MUNICIPALES. CONSEJERA PONENTE: DRA. BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ Bogotá, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil catorce (2014) Radicación No. 680012331000200201142 01. Expediente No. 4658-2013.

Orden de embargo debe examinar si recursos son única fuente de ingreso

En una sentencia de tutela que se dio a conocer recientemente, la Corte Constitucional advirtió que ante las reclamaciones por embargos que se ordenan sobre la totalidad de los honorarios que percibe una persona se debe examinar si los mismos constituyen su única fuente de ingreso, caso en el cual se tendrán que adoptar las medidas pertinentes para no afectar derechos fundamentales ni el mínimo vital (determinada cifra de dinero en relación con su estándar de vida).

La Sala recordó que los recursos de reposición y apelación (artículo 348 y numeral 7º del artículo 351 del Código de Procedimiento Civil) son algunos de los mecanismos judiciales disponibles para controvertir órdenes de embargo.

Así mismo, la reducción del embargo que se puede solicitar después de la consumación de la medida cautelar, tal como lo señala el artículo 600 del Código General del Proceso (Ley 1564 del 2012) (M. P. María Victoria Calle Correa). (Corte Constitucional, Sentencia T-725, 9/16/2014) Noticia generada en Ene. 13/15 (11:48 a.m.)

Acción de nulidad permite revertir venta de bien de uso público

Bajo la teoría de los motivos y las finalidades, la acción de nulidad también procede contra actos particulares y concretos, cuando la situación individual genere un interés especial para la comunidad, sea de alcance y contenido nacional y tenga una incidencia trascendental en el patrimonio económico, social y cultural de la Nación.

Así lo reiteró la Sección Primera del Consejo de Estado, al afirmar que dicha acción permite revertir la venta de un bien de uso público, dado

que este se debe destinar a la satisfacción de necesidades colectivas, las cuales prevalecen sobre el interés individual.

En ese caso, el efecto de la sentencia de nulidad es retrotraer las cosas al estado anterior, es decir, la consecuente anulación de los registros que materializaron la enajenación, explicó el alto tribunal.

Con estos argumentos, la corporación confirmó la orden de cancelar la matrícula inmobiliaria y la cédula catastral de un inmueble ubicado en terrenos de bajamar, cuyo dominio fue transferido a título de venta a un particular por parte del alcalde de Tumaco (Nariño).

(Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia 52001233100020050142101, sep. 18/14, M. P. María Claudia Rojas)

Demandan sanciones previstas por uso indebido de símbolos patrios

El que use indebidamente la bandera, el escudo de Colombia o cualquier otro emblema patrio incurrirá en multa. Así lo estima el artículo 13 del Decreto 522 de 1971, cuya inexecutable se solicita en una demanda que admitió la Corte Constitucional.

De acuerdo con el ciudadano, la norma vulnera el artículo 20 superior. En su opinión, la sanción estimada es desproporcionada, ya que, en lugar de prever una contravención, se debió optar por un castigo menos gravoso (demandantes: Luis David Albarracín y Karilym Ramírez). (Corte Constitucional, Demanda D-10519, 10/23/2014) Noticia generada en Ene. 14/15 (3:33 p.m.)

Miércoles 21 de Enero de 2015

Corrigen comunicado sobre exequibilidad de regulación del derecho de petición

La Corte Constitucional informó de un error involuntario en su comunicado 47, correspondiente a las decisiones adoptadas los días 3 y 4 de diciembre del 2014, pues se omitieron dos puntos de la parte resolutive de la Sentencia C-951, que avaló el articulado del proyecto de ley estatutaria que regula el derecho de petición.

El alto tribunal aclaró que dicho fallo también declaró la exequibilidad condicionada de los artículos 16 y 26 de la iniciativa, relativos al contenido de las peticiones y la insistencia del solicitante en caso de reserva, respectivamente.

Así, el numeral 2° del artículo 16 exige la identificación del peticionario, frente a lo cual la corporación estableció que es viable tramitar y resolver de fondo peticiones anónimas, cuando existan razones serias y creíbles que justifiquen mantener la reserva de la identidad.

En cuanto al artículo 26, el condicionamiento introducido permite la resolución del recurso de insistencia por cualquier juzgador en los municipios en los que no existe juez administrativo. (Corte Constitucional, Comunicado, 12/4/2014) Noticia generada en Ene. 20/15 (3:31 p.m.)

Reglamentan Ley de Acceso a la Información Pública

Para facilitar la implementación y el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), el Gobierno expidió hoy el primer decreto que reglamenta temas relacionados con la gestión de la información pública en cuanto a su adecuada publicación y divulgación, la recepción y respuesta a solicitudes de acceso, su adecuada clasificación y reserva, la elaboración de los instrumentos de gestión de información así como el seguimiento de la misma.

Sobre estándares para publicar información, la norma señala que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), a través de la estrategia de Gobierno en Línea, expedirá los lineamientos que deben atender los sujetos obligados para cumplir con la publicación y divulgación la información señalada en la ley, con el objeto de que sean dispuestos de manera estandarizada.

Así mismo, y de acuerdo con las condiciones establecidas, los obligados deben publicar en una sección particular de sus sitio web, la cual estará identificada con el nombre de "Transparencia y acceso a información pública", información como: registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada, el esquema publicación y el programa de gestión documental, entre otros.

En cuanto a accesibilidad, advierte que todos los medios de comunicación electrónica dispuestos para divulgar la información deberán cumplir con las directrices de accesibilidad que establezca el

Mintic. Solicita a los sujetos obligados divulgar en su sitio web, en medios de comunicación física y en otros canales habilitados, los números telefónicos y las direcciones físicas y electrónicas oficiales destinadas para la recepción de las solicitudes. (Presidencia de la República, Decreto 103, 01/20/2015) Noticia generada en Ene. 20/15 (4:53 p.m.)

Explican régimen de responsabilidad estatal por daños causados con vehículos automotores

El Consejo de Estado declaró la responsabilidad estatal por la muerte de un motociclista, causada por la colisión de este con un vehículo conducido por un servidor público en estado de embriaguez. El fallo reprochó que el funcionario hubiera desatendido el deber objetivo de cuidado que dicha actividad comporta y desconocido las normas de tránsito.

En ese contexto, señaló que, por regla general, el régimen de imputación es objetivo, en tanto la conducción de automotores crea un riesgo excepcional. Sin embargo, cuando la causa determinante del daño es el incumplimiento de los deberes y funciones asignadas a la administración, se debe aplicar la falla del servicio, reiteró el alto tribunal.

En el caso analizado, la corporación redujo la condena impuesta en un 20 %, pues la víctima no portaba casco de protección, lo cual fue un comportamiento inadecuado, ya que debió extremar las medidas de seguridad (C. P. Carlos Alberto Zambrano).

(Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 76001233100019990097201 (31511), 11/26/2014)
Noticia generada en Ene. 20/15 (10:46 a.m.)

Inhabilidad para contratar con el Estado del interventor que no informa actos de corrupción es constitucional

Después de 18 meses desde que se dio a conocer mediante comunicado de prensa, la Corte Constitucional publicó el texto de la sentencia que declaró exequible el parágrafo 2º del artículo 84 del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 del 2011), que faculta a la entidad contratante para declarar incumplido el contrato de interventoría si no se informa sobre la ocurrencia de actos de corrupción tipificados como delitos en el

ordenamiento penal y además prevé una inhabilidad de cinco años para contratar con entidades del Estado.

Para la Corte, esta norma no vulnera el principio de legalidad (artículo 29 de la Carta Política), pues la expresión “actos de corrupción” resulta determinable a partir de la lectura integral del ordenamiento jurídico vigente. Por ejemplo, la Convención interamericana contra la corrupción incorporada por la Ley 412 de 1997 y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción aprobada en la Ley 970 del 2005 le permiten al operador jurídico determinar si un hecho punible es o no un acto de corrupción.

En este contexto, aclaró que el interventor de un contrato sometido al régimen de la Ley 80 de 1993 siempre será un particular externo a la entidad, que se contrata específicamente para realizar este tipo de labores, mientras que se trata de una labor de supervisión cuando son los propios empleados de la entidad contratante los que vigilen los aspectos técnicos del proceso de ejecución del contrato.

Luis Ernesto Vargas salvó el voto, Jorge Iván Palacio, Gabriel Eduardo Mendoza y Luis Guillermo Guerrero presentaron aclaraciones de voto (M. P. Alberto Rojas Ríos). (Corte Constitucional, Sentencia C-434, 7/10/2014) Noticia generada en Ene. 19/15 (4:24 p.m.)

Corresponde al juez ordenar la efectividad de la cláusula penal, y no a la entidad pública imponerla unilateralmente

Consejo de Estado decidió condenar a contratista al pago de cláusula penal al verificar su incumplimiento injustificado.

“La cláusula penal pecuniaria, como su nombre lo indica, recoge una valoración anticipada de los perjuicios generados por el incumplimiento, a los que el contratante afectado puede acceder sin acreditar el daño ni su cuantía, sujeto a la valoración previamente acordada, sin perjuicio de su derecho a optar por el establecimiento de los perjuicios y así acceder a un monto que podría exceder lo anticipadamente previsto. Con todo, al amparo de los contratos celebrados en vigencia de la Ley 80 de 1993 le corresponde al juez del contrato declarar el incumplimiento y ordenar la efectividad de la cláusula penal pecuniaria, con el fin de restablecer al contratante cumplido e indemnizarle los perjuicios causados. En suma, porque es del resorte del Juez resolver sobre su suerte, de modo que la entidad carece de competencia para imponerla unilateralmente”.

Por lo tanto, La Corporación consideró procedente la impugnación realizada por el demandante y revocó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, ya que “no hay duda sobre la responsabilidad que le incumbe al contratista TAVERA HERNÁNDEZ; como quiera que las razones argüidas en su defensa no desvirtúan el incumplimiento, ni lo justifican, en cuanto para solucionar las dificultades que se le presentaron, relativas al invierno y aquellas relacionadas con la extracción del material se prorrogó el contrato en tres oportunidades sin que lograra superar los retrasos, por lo que deberá imponerse la pena convenida a título de cláusula penal pecuniaria, en los términos de la Resolución n.º 004732 del 6 de agosto/97”. Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2014-N30896 (00591-01) Contractual 2014/08/29

Causales de rechazo de licitaciones públicas deben estar fundamentadas en la ley y no son arbitrio de la entidad pública

“En esta línea de pensamiento, resulta claro que el rechazo o la descalificación de ofertas no puede depender de la libre discrecionalidad de la Administración, en la medida en que el oferente adquiere el derecho de participar en el procedimiento de selección y se genera para él una situación jurídica particular, en consecuencia, para rechazar o descalificar una propuesta la entidad pública debe sujetarse a determinadas reglas consistentes en que las causales que dan lugar a ello se encuentren previamente establecidas en la ley o deriven del incumplimiento de requisitos de la propuesta o de la omisión de documentos referentes a la futura contratación que sean necesarios para la comparación de las propuestas, de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, puesto que la causa excluyente debe ser razonable, esencial y proporcionada, toda vez que no tendría justificación excluir una propuesta por una deficiencia que no tenga incidencia alguna en la contratación.”.

Por lo tanto, La Corporación le dio la razón al demandante, quien impugnaba la licitación y posterior adjudicación del contrato estatal en la cual su propuesta había sido rechazada, ya que “frente al argumento expuesto por la entidad en la audiencia de aclaración de los pliegos, de conformidad con el cual la justificación o la finalidad práctica de esta causal de rechazo estaba dada por la necesidad de conocer durante la etapa de selección el profesional que en adelante ejecutaría la obra contratada para establecer a partir de sus hojas de vida y su experiencia relacionada, cuál era el personal más idóneo, la Sala no halla que dichas

razones ofrezcan suficiente asidero jurídico que ampare su incorporación y, menos aún, que del mismo se desprenda su necesidad para realizar la comparación objetiva de las propuestas.". Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2014-N33319 (00706-02) Contractual 2014/06/25

Acciones a seguir frente al incumplimiento de un contratista con el pago de los aportes a la Seguridad Social

"Como lo señala la Circular No. 114293 del 12 de junio de 2013, la Ley 1607 de 2012 derogó el artículo 123 de la Ley 1438 de 2011 que facultaba a la UGPP para verificar el cumplimiento y/ó los deberes de los empleadores en relación con el pago de las cotizaciones a la seguridad social y para la imposición de multas por violación a las normas contenidas en los artículos 161, 204 y 210 de la Ley 100 de 1993, perdiendo dicha Unidad competencia para el conocimiento de estos temas, sin que se estableciera en la norma la entidad que debía asumir estas funciones, por lo que en criterio de esta Oficina es necesario acudir a las disposiciones que con anterioridad a la expedición de la Ley 1438 de 2011 fijaban la competencia en los casos de incumplimiento de los empleadores en materia de pensiones salud y riesgos laborales".

MinTrabajo-Concepto-2014-N0159747 2014/09/16

No se puede reconocer prescripción de la obligación tributaria si esta fue cancelada

Así lo sostuvo el Consejo de Estado al recordar el contenido del artículo 819 del Estatuto Tributario y precisar que en estos casos no puede haber devoluciones o compensaciones, ni hay lugar a repetición, por tratarse de una deuda prescrita, aun cuando el contribuyente desconozca dicho fenecimiento.

En el caso concreto, la demandante prefirió acogerse a los beneficios de la Ley 1066 para establecer un acuerdo de pago por el 30 % de deudas sin cancelar al 31 de diciembre del 2004, lo que impide decidir de fondo si el punto de partida de la prescripción era el vencimiento del plazo para el pago y no la fecha de liquidación del impuesto (C. P. Jorge Octavio Ramírez). (Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia 05001233100020070002601 (19911), 12/12/2014) Noticia generada en Ene. 21/15 (9:09 a.m.)

Comisión que se concede a empleado de carrera no implica perder el derecho a liquidación retroactiva de cesantías

“En torno al tema de la comisión que se concede a un empleado de carrera, para desempeñar otro empleo, la Sala ya ha dejado sentado que ello no implica solución de continuidad en la prestación del servicio y por ello, al no existir rompimiento de la relación laboral, no puede considerarse que se pierda el derecho a la liquidación retroactiva de las cesantías, cuando el empleado es beneficiario de dicho régimen”. Por lo anterior, la Corporación consideró que “si bien es cierto la demandante dejó de laborar en el Instituto Departamental de Salud a causa de la comisión concedida para desempeñar otro empleo en una ESE adscrita al mismo departamento, lo fue continuamente y no en virtud del rompimiento de la relación laboral por la renuncia presentada al cargo que venía desempeñando desde el año 1976, sino por la comisión concedida por su nominador, para desempeñar otro cargo, situación que no implica solución de continuidad en la prestación del servicio y tampoco comporta la pérdida de su régimen de liquidación de cesantías”.

“Aunado a lo anterior, no hay prueba de que en virtud de dicha comisión la demandante hubiera renunciado al régimen de retroactividad de cesantías de que era beneficiaria, por lo que el reconocimiento de las cesantías con base en dicho régimen debió hacerse aplicando el mismo hasta el momento en que se produjo su desvinculación del servicio”. El Alto Tribunal precisó que “la liquidación de las cesantías con el régimen de retroactividad deberá realizarse con el salario devengado como Gerente del Hospital Eduardo Santos de la Unión Nariño, pues fue el último empleo desempeñado en la administración departamental, conforme a las resoluciones que dispusieron tales novedades”. Consejo de Estado CE-SEC2-EXP2014-N02275-12 (00178-01) Nulidad-Restab 2014/04/09

Consejo de Estado elegirá nuevos presidente y vicepresidente

Se trata de la primera sesión plenaria del 2015, que se iniciará desde las 8:30 a. m. de este martes. Los nuevos dignatarios del Consejo de Estado remplazarán a la magistrada María Claudia Rojas y a Martha Teresa Briceño.

Para este 2015, se postularon a la Presidencia la propia vicepresidenta, además de Martha Teresa Briceño, de la Sección Cuarta; Jaime Orlando

Santofimio, de la Tercera; Gerardo Arenas, de la Segunda y William Zambrano, de la Sala de Consulta.

Mientras tanto, la Vicepresidencia se la disputarán Hugo Bastidas, de la Sección Cuarta; Alberto Yepes, de la Quinta y Danilo Rojas, de la Tercera. (Consejo de Estado Noticias, Orden del día, 01/20/2015) Noticia generada en Ene. 20/15 (8:20 a.m.)

Jueces deberían recibir cátedra sobre derechos y composición de la comunidad LGTBI: Corte Constitucional

El alto tribunal exhortó a la Escuela Judicial Rodrigo Lara a que cree un módulo en el que no solo explique cuáles son las garantías que deben recibir estas personas por parte de las instituciones sino que le permita a los operadores judiciales tener claridad en torno a los conceptos de orientación sexual e identidad de género.

La decisión obedece a un expediente de tutela en el cual el juez de origen confundió la orientación sexual con la identidad de género, al concluir que un joven que pretende reflejar el aspecto físico de una mujer puede ser homosexual.

La Sala aclaró que no todos los casos de esta naturaleza, como en los de los transgeneristas, necesariamente tratan de personas que sientan atracción por los de su mismo sexo.

Además, compulsó copias al Consejo Superior de la Judicatura para que determine si hay lugar a investigarlo, por probables tardanzas injustificadas en la actuación, no sin antes llamarle la atención por haberse referido a la homosexualidad como una "anormalidad", haciendo un "uso del lenguaje desobligante, peyorativo y discriminatorio" (M. P. Jorge Iván Palacio). (Corte Constitucional, Sentencia T-804, 11/4/2014) Noticia generada en Ene. 20/15 (9:16 a.m.)

Contabilización convencional de aportes para pensión de invalidez cuando esta es de nacimiento es inconstitucional

Así lo determinó la Corte Constitucional, que precisó que el límite final para estos casos no puede ser la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral.

En estas circunstancias, aclaró, el tiempo mínimo de cotizaciones debe contabilizarse hasta la fecha del dictamen de pérdida de la capacidad para trabajar, o por la última cotización efectuada o, incluso, por la fecha de solicitud del reconocimiento pensional.

Lo anterior teniendo en cuenta que así lo estableció el mismo tribunal en la Sentencia C-428 del 2009 frente al artículo 1º de la Ley 860 del 2003 (que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993); la norma establece un mínimo de aportes de 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, lo que demuestra que si se aplicara en idénticos términos para los casos que son de nacimiento, estas personas nunca tendrían derecho a pensión (M. P. Martha SÁCHICA). (Corte Constitucional, Sentencia T-789, 10/23/2014) Noticia generada en Ene. 20/15 (8:00 a.m.)

Lunes 26 de Enero de 2015

Convenios interadministrativos deben realizarse 4 meses antes de elecciones presidenciales para no infringir ley de garantías

“Ahora, en cuanto a la posibilidad de celebrar un Convenio Interadministrativo antes de la aplicación de la Ley de Garantías, el artículo 33 de la misma establece la prohibición de contratación directa durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la fecha en la cual el Presidente de la República sea elegido.

Entonces, en la medida en que los territorios indígenas tienen capacidad para celebrar Contratos Estatales y, que el Convenio interadministrativo se hubiere suscrito antes del 25 de enero de 2014, no se estaría infringiendo las restricciones contenidas en la Ley de Garantías”. Col-Compra-Eficiente-Concepto-2014-N0000155 2014/12/02

Lineamientos generales para la expedición de manuales de contratación

“Los Lineamientos Generales para la expedición de Manuales de Contratación establecen varias definiciones al inicio del documento, en donde se hace mención a que los Procesos y Procedimientos están relacionados con el sistema de gestión de calidad.

Estos Procesos y Procedimientos, relacionados con la gestión contractual, son los que se deben regular en el Manual de Contratación.

Lo que no debe regular el Manual de Contratación es el procedimiento administrativo para la imposición de multas o sanciones a los contratistas, el cual está en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 o, de manera subsidiaria, en la ley 1437 de 2011”.

Col-Compra-Eficiente-Concepto-2014-N0000143 2014/12/01

El Plan anual de adquisiciones no refleja todos los gastos de una entidad por ser un documento descriptivo de contratación

“El Plan Anual de Adquisiciones- PAA- es un instrumento de planeación contractual que las Entidades deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del Decreto 1510 de 2013. Este instrumento debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretende adquirir la Entidad durante el año.

Así las cosas, el PAA de Colombia Compra Eficiente no es lo mismo que un plan presupuestal de una entidad. Por su naturaleza como documento descriptivo de los procesos de contratación planeados para el 2014 no va a reflejar todos los gastos de la entidad. Hay gastos significativos como los empleados bajo nómina, impuestos y gastos de caja menor que no entran al PAA.

Por eso es normal que haya un sesgo entre el valor total del PAA y el presupuesto asignado. Este sesgo no tiene ninguna repercusión y es el resultado de nuestro diseño del PAA”. Col-Compra-Eficiente-Concepto-2014-N0000153 2014/12/02

Conductor, propietarios y empresa de bus, no responderán por accidente vial por estado de embriaguez de la víctima

La Corte se pronunció en referencia al recurso de casación elevado por la parte demandante del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual por accidente de tránsito iniciado por quien fue la cónyuge de la víctima en nombre propio y de los hijos mutuos contra el conductor y propietarios de autobús, y Flota Magdalena S.A. como empresa a la que éste último se encontraba afiliado, formulando cargos frente al fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia.

Las pretensiones iniciales de los demandantes, relativas a que los demandados los indemnizaran solidariamente debido a la muerte de su cónyuge y padre ocasionada porque según su parecer el mencionado

bus invadió el carril de la víctima y colisionó de frente la motocicleta que éste conducía, fueron denegadas por el Tribunal.

En consideración del cuerpo colegiado, teniendo en cuenta que lo ocurrido se considera como una actividad peligrosa, los demandados lograron demostrar que según el lugar del impacto de los vehículos y el estado de embriaguez del occiso en el accidente, no se configuró su responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima.

De manera genérica y ante la acusación de la censura atinente a que las pruebas fueron mal apreciadas y algunas no apreciadas por parte del Tribunal, la Sala adujo que los cargos no tenían la virtualidad de prosperar toda vez que las piezas presuntamente inadvertidas sólo se relacionaron pero no se confrontó lo dicho por el juzgador de segunda instancia con lo que de ellas presuntamente se deriva en realidad.

En particular, señaló que en efecto no podía atribuírsele fuerza probatoria a las Resoluciones proferidas por la Fiscalía General de la Nación al no ostentarla naturalmente, que no puede pretender darle un sentido distinto al dictamen rendido por la Inspección de Policía y Tránsito y a su vez solicitar que no se tenga en cuenta, y que el juez no sólo dedujo la absolución por la invasión de carril por parte de la moto, sino también por la parte del vehículo sobre la que se produjo el impacto y el estado de embriaguez de la víctima, puntos que no fueron controvertidos. Corte Suprema de Justicia CSJ-SCC-EXP2014-N00311-01-SC10132 Sentencia 2014/07/31

Aclaran caducidad de acción de grupo contra acto administrativo en vigencia del CPACA

Si un acto administrativo particular afecta a 20 o más personas, podrá solicitarse su nulidad, siempre que alguna de ellas hubiera agotado el recurso obligatorio. Así lo establece el artículo 145 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, Ley 1437 del 2011).

En ese evento, el CPACA introdujo un nuevo término de caducidad de cuatro meses contados desde el día siguiente al de la notificación del acto, distinto al contemplado en la Ley 472 de 1998, norma especial que regula la acción de grupo.

En efecto, bajo la Ley 472, el término para presentar la demanda era de dos años contabilizados a partir de la fecha en que se causó el daño o

cesó la vulneración. Por ende, si el acto administrativo fue notificado antes de la entrada en vigor de la Ley 1437, tal acción deberá promoverse según la Ley 472, afirmó la Corte Constitucional.

De acuerdo con la sentencia, el CPACA solo aplica a los procesos iniciados durante su vigencia, es decir, desde el 2 de julio del 2012, mientras que las actuaciones en curso seguirán rigiéndose por el régimen anterior.

Así las cosas, la Ley 472 mantiene su obligatoriedad para las situaciones jurídicas surgidas antes de esa fecha, independientemente del momento en que culminen, lo que implica que tiene efecto ultractivo hasta su terminación, aseguró la corporación.

Por esta razón, dejó sin efectos un auto proferido por un tribunal que rechazó la acción de grupo interpuesta por los habitantes de un conjunto residencial al que se le asignó el estrato más alto, al considerarla caducada. La Corte verificó la violación del debido proceso, porque el accionado aplicó una normativa improcedente.

(Corte Constitucional, Sentencia T-869, nov. 13/14, M. P. Jorge Pretelt)

Recuerdan requisitos para que proceda conciliación contencioso administrativa tributaria

El Consejo de Estado aprobó un acuerdo de conciliación y declaró la terminación de un proceso con el que se pretendía la nulidad de una resolución por medio de la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) practicó una liquidación oficial de revisión.

Lo anterior en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 147 de la Ley 1607 del 2012 para conciliar en procesos tributarios y aduaneros. De acuerdo con esta norma, reglamentada por el Decreto 699 del 2013, algunos de los requisitos para que proceda este trámite son la presentación ante el comité de conciliación de la DIAN del pago de la liquidación privada de los impuestos o retenciones correspondientes al periodo objeto de demanda, siempre que hubiere lugar; prueba del pago o acuerdo de pago del total del impuesto o tributo aduanero en discusión; prueba del pago de la declaración privada del impuesto sobre la renta por el año gravable 2012, siempre que hubiere lugar al mismo, conforme a los plazos previstos por el Gobierno Nacional, y manifestación de no estar en mora a 26 de diciembre del 2012 (fecha de

entrada en vigencia de la Ley 1607), cuando se trate de deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento en leyes anteriores

(C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia). (Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia 05001233100020070297401 (21198), 12/16/2014)
Noticia generada en Ene. 22/15 (3:49 p.m.)

Vinculación de litisconsorte necesario puede realizarse en cualquier momento antes de la sentencia de primera instancia

Si el demandante omite vincular a un litisconsorte necesario en la demanda, el juez debe hacerlo oficiosamente, so pena de nulidad insaneable de lo actuado.

“Lo vinculación de quienes conforman el litisconsorcio necesario podrá hacerse dentro de la demanda, bien obrando como demandantes o bien llamados como demandados todos quienes lo integran y en el evento en que el juez omita citarlos, debe declararse la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de la demanda f(# 8 Artículo 140 del C. P. Civil).

Si esto no ocurre, el juez de oficio o por solicitud de parte podrá vincularlos en el auto admisorio de la demanda o en cualquier tiempo antes de la sentencia de primera instancia, otorgándoles un término para que comparezcan, y de no hacerlo debe declararse la nulidad de una parte del proceso o a partir de la sentencia de primera instancia (# 9 Artículo 140 C. P. Civil), con el fin de lograr su vinculación al proceso para que tengan la oportunidad de asumir la defensa de sus intereses, dado que la sentencia los puede afectar”.

Por lo tanto, La Corporación consideró improcedente la impugnación realizada por el demandado, quien consideraba que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo había vinculado de forma extemporánea al proceso y por lo tanto se había configurado una causal nulidad, por lo que “el Despacho reitera que la vinculación de quienes conforman el litisconsorcio necesario puede, incluso, decretarse de manera oficiosa por el juez de la causa, ora en el auto admisorio de la demanda, ora en cualquier estado del proceso hasta antes de dictar sentencia de primera instancia, por lo cual la supuesta extemporaneidad que alegó la parte demandada respecto de la petición de vincular a las sociedades Proactiva Doña Juana E.S.P., S.A., y Aseguradora de Fianzas Confianza S.A., resulta desacertada”. Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2014-N49905 (00198-01) Contractual 2014/09/12

Reglamentan Ley General de Archivos en relación con inspección y vigilancia de archivos de entidades estatales

El Ministerio de Cultura reglamentó el Título VIII de la Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivos) en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las entidades del Estado y los documentos de carácter privado declarados de interés cultural.

Así, el Archivo General de la Nación será la entidad encargada de ejercer tales funciones sobre las entidades del Estado, así como sobre los documentos declarados de interés cultural. Por lo cual, esta entidad podrá realizar visitas a las instituciones públicas y a las personas naturales y jurídicas con las cuales las entidades oficiales contraten la custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo, para lograr el cumplimiento de forma preventiva y correctiva de la ley.

Además, define los mecanismos bajo los cuales el Archivo General ejercerá sus funciones (visitas presenciales, visitas virtuales, mediante el uso de tecnologías de la información, oficios, solicitando información sobre las gestiones adelantadas, formatos, manuales o en línea, establecidos por las autoridades competentes y otros mecanismos para verificar el cumplimiento de la función archivística).

La norma deroga los numerales 2º, 11 y 13 del artículo 6º del Decreto 2578 del 2012. (Mincultura, Decreto 0106, 1/21/2015) Noticia generada en Ene. 22/15 (4:14 p.m.)

Declaración extrajuicio sin ratificar no prueba calidad de compañero permanente

Una declaración extrajuicio no ratificada dentro del proceso judicial no puede aceptarse como medio probatorio de la calidad de compañero permanente, advirtió la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Para acreditar esa condición, explicó, se debe probar la convivencia y una comunidad de vida permanente entre dos personas que no contrajeron matrimonio entre sí.

La Sala recordó que la sociedad patrimonial se presume cuando entre dos personas sin impedimento legal para contraer matrimonio exista

una unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años. Además, cuando, existiendo este impedimento, la sociedad conyugal anterior fue disuelta y liquidada por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital.

Así, señala la sentencia, para acreditar la existencia de la unión marital de hecho, es necesario probar la convivencia, que la unión se efectuó entre dos personas que no contrajeron matrimonio entre sí, que existe una comunidad de vida permanente y que la unión es de carácter singular, es decir, monogámica.

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 76001233100019980116201 (34270), dic. 10/14, C. P. Jaime Orlando Santofimio)

Jueves 29 de Enero de 2015

AVALA PETICIONES ANÓNIMAS

Texto sentencia en que Corte declara la exequibilidad condicionada al proyecto de ley sobre derecho de petición

No siempre se exigirá el número de identificación de quien realiza una petición, siempre que se desprenda de ella razones serias y creíbles: Corte Constitucional.

La Corte Constitucional declaró exequible el proyecto de ley estatutaria PL-2012-N065S-ACU 031S/12 Senado-227/12C, Derecho de petición. Declaró la exequibilidad de los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 33, que harán parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala Plena declaró inexecutable las expresiones “funcionario competente” y “o ante el servidor público”, contenidas en el artículo 15 y su parágrafo 3º, tras concluir que no se encuentra sujeta a la Constitución, exigir que las peticiones verbales solo puedan ser presentadas ante el funcionario competente.

Frente al texto restante del mismo artículo, la Corte sostuvo que este se ajustaba a la Constitución, siempre y cuando se entendiera que, “ante la imposibilidad de aceptar el trámite de la petición de manera verbal y la consecuente necesidad de exigir su presentación escrita, las entidades deben motivar dicha determinación, a través de un acto administrativo general”.

Así mismo, la Sala estableció que la definición del derecho de petición y su naturaleza, expresada en el artículo 13, fue declarada constitucional, su aplicabilidad fue condicionada a que se estime prohibido a que menores de edad, puedan formular derechos de petición ante las entidades.

De otra parte, la exigencia de información reservada, que solo puede provenir del interesado, su apoderado o un tercero expresamente autorizado, no solo debe cobijar las peticiones relacionadas con hojas de vida, historia laborales, expedientes pensionales y demás registros de personal, además datos financieros, comerciales y los que requieran de secreto profesional, según lo establecido en el artículo 24, el cual fue declarado exequible.

CorteConstitucional-C-2014-N0951 (PE-041) Sentencia 2014/12/04

Pactos de exclusividad en contratos estatales de comodato son nulos: Consejo de Estado

Haciendo referencia al Decreto 777 de 1992, la Corporación indicó: "Art. 1º. Los contratos que en desarrollo de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 355 de la Constitución Política celebren la Nación, los Departamentos, Distritos y Municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público, deberán constar por escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares, salvo lo previsto en el presente decreto y sin perjuicio de que puedan incluirse las cláusulas exorbitantes previstas por el decreto 222 de 1983".

Debido a esto, La Corporación negó la impugnación realizada por el demandante, quien consideraba que debía declararse el incumplimiento por parte del municipio de Valledupar, pues este había contratado con otras entidades a pesar de existir un pacto de exclusividad.

Así las cosas, confirmó del fallo del Tribunal Administrativo del César, pues "a través de la disposición contractual el municipio de Valledupar se obligó a celebrar todos los contratos relativos a la conservación, mantenimiento, adecuación y arreglo de vías (contratos de obra Pública) con el comodatario y resulta evidente que la entidad comodante no podía contraer tal obligación sin desconocer los más elementales principios que informan la función administrativa a términos del artículo 209 de la Constitución Política -igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad -, entre otros y sin incurrir en violación de los preceptos

imperativos contenidos en el Decreto Ley 222 de 1983 y de la ley 80 de 1993, normas vigentes mientras estuvo vigente el contrato de comodato”.

Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2014-N28052 (00667-01) Contractual
2014/05/09

TEXTO DE LA SENTENCIA DE 2013

En firme inhabilidades para contratar con el Estado a interventor que incumpla el deber de información, bajo una condición

La Corte Constitucional declaró exequible el parágrafo 2 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión, en el entendido que, en caso de concurrencia de sanciones de inhabilidad para contratar con el Estado, solo tendrá aplicación la más alta, siempre y cuando se hayan impuesto por el mismo hecho.

En el presente caso, le correspondió a la Corte resolver: 1. Si la inhabilidad para contratar por cinco años con el Estado establecida en el parágrafo 2 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, desconoce el principio de legalidad (artículo 29 de la Constitución Política), al hacer referencia a actos de corrupción, sin que estos sean definidos en el mismo parágrafo o previstos como conductas punibles específicas en el Código Penal; 2. Si vulnera el principio non bis in ídem y, en consecuencia, los mandatos del debido proceso, el establecer la posibilidad de que pueda imponerse al interventor, una doble sanción por la misma causa prevista en el derecho disciplinario; y 3. Si al prever la declaratoria de incumplimiento del deber de información del interventor y la consecuente inhabilidad fruto de una actuación administrativa, vulnera el debido proceso, en cuanto desconoce el derecho de defensa.

A juicio de la Corporación, este resultado es contrario al principio de proporcionalidad. Aunque encuentra que son adecuadas las dos sanciones para proteger la actividad contractual del Estado por cuanto impiden que la realice quien se considera no tiene la aptitud para llevarla a cabo con condiciones de eficiencia, transparencia y moralidad, resulta innecesario que el mismo bien jurídico o la misma actividad se proteja dos veces, a través de dos sanciones impuestas por el mismo hecho. P

or tal razón, la Corte declaró la exequibilidad condicionada del parágrafo 2 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, de manera que se entienda que, en caso de concurrencia de sanciones de inhabilidad para contratar con el Estado, solo tendrá aplicación la más alta, siempre y cuando se hayan impuesto por el mismo hecho.

CorteConstitucional-C-2013-N0434 (D-9441) Sentencia 2013/07/10

Títulos académicos no justifican inaplicación del principio laboral "a trabajo igual, salario igual"

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, se configura un trato discriminatorio cuando el empleador comienza a hacer una especial exigencia de calificación profesional para quienes desempeñen determinado puesto de trabajo, y, a pesar de que quienes acrediten tal exigencia y quienes no lo hacen realicen el mismo trabajo, en la misma jornada y con las mismas condiciones de eficiencia, remunera mejor a los primeros.

Según la corporación, en este caso, la diferencia retributiva es discriminatoria, pues sencillamente, el tertium comparationis elegido por el empleador (la sola formación o calificación, sin que se aprecie un mejor desempeño del puesto u oficio, debido a una mejor competencia), no es relevante u objetivo para justificar ese trato diferente.

Por eso, indicó que no existe una relación determinante de causa a efecto entre la calificación o formación académica y la mejor realización práctica del trabajo con el estándar apropiado por efecto de una mejor competencia.

Así las cosas, concluyó que es la eficiencia el verdadero factor que pueda justificar una diferencia de trato retributivo, y no la simple exhibición de un título, sin demostrar la mejor repercusión de éste en el trabajo

(M. P. Carlos Ernesto Molina Monsalve). (Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, Sentencia SL-16217 (45830), 11/26/2014) Noticia generada en Ene. 29/15 (10:01 a.m.)

Por presuntas irregularidades de carácter presupuestal, Procuraduría formuló pliego de cargos a exgobernador del Valle del Cauca

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el señor Francisco José Lourido Muñoz, en su condición de gobernador del departamento del Valle del Cauca para la época de los hechos, por presuntas irregularidades de carácter presupuestal.

De acuerdo con el auto de cargos, el entonces gobernador no apropió la partida necesaria y suficiente en el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos presentado a la Asamblea Departamental para la vigencia 2011, equivalente a la suma de \$23.150 millones, para cubrir el déficit fiscal representado en cuentas por pagar y reservas presupuestales desfinanciadas con recursos propios y rentas cedidas, constituidas al cierre del ejercicio fiscal 2010.

Consideró la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública que con su conducta el investigado podría haber contravenido el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento del Valle del Cauca.

El ente de control calificó la posible falta del señor Lourido Muñoz como grave a título de culpa grave, por cuanto no fue diligente y cuidadoso en su deber como primera autoridad administrativa del departamento al realizar las apropiaciones presupuestales para la vigencia 2011.

Teniendo en cuenta que a la presente investigación no se encuentra vinculado el secretario de Hacienda, a quien le correspondía incluir la partida necesaria para cubrir el déficit fiscal representado en cuentas por pagar y reservas presupuestales, constituidas al cierre del ejercicio fiscal 2010, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública remitirá copia de la presente providencia a la Regional del Valle del Cauca, para que adelante el correspondiente averiguatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Decreto 262 de 2000.

Esta investigación se inició como resultado de la auditoría integral modalidad especial ola invernol y cierre fiscal 2010, practicada por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca al nivel central de este departamento, en la cual se encontraron posibles hallazgos con alcance disciplinario en el ente territorial". Fuente: Procuraduría General de la Nación.

Toda entidad pública que suscriba un contrato de obra deberá pagar la Contribución de obra pública

"Para efectos de que nazca a la vida jurídica la obligación de pago de la Contribución de Obra pública debe cumplirse dos supuestos: a) La

celebración de un contrato de obra definido para tales efectos como se señala en el Estatuto Orgánico de la Contratación, b) Que este sea suscrito por parte de una entidad de derecho público.

En consecuencia, toda aquella entidad pública que suscriba un contrato de obra, es decir, de aquellos en donde se realice una "construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y "pago", será sujeta al respectivo gravamen". DIAN-Concepto-2014-N0065227 (1469) 2014/12/01

Estos son los impactos de los recobros al Fosyga: Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación, la Universidad Javeriana y el Centro de proyectos para el desarrollo (Cendex) realizaron una investigación sobre los recursos del sector salud en la que se evidencia cómo se afectan sustancialmente cuando se recobran medicamentos y procedimientos incluidos en el POS al Fondo del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Fosyga), identifica las EPS y los departamentos que más recobran, los procedimientos y los 20 medicamentos de mayor impacto.

Este estudio hace parte de la publicación "Recobros al Sistema General de Seguridad Social en Salud 2006-2012" y recomienda tomar medidas para que los medicamentos y procedimientos incluidos en el POS no se sigan recobrando al Fosyga.

El Ministerio Público exhorta a las instancias del sistema de salud, a los usuarios y a los actores judiciales para que se erradiquen las prácticas que van en detrimento del interés común y ponen en riesgo el patrimonio público, ya que los recobros al Fosyga pasaron de \$ 200.000 millones en el 2005 a \$ 2,3 billones en el 2010.

(Procuraduría General de la Nación, Comunicado, 1/28/2015) Noticia generada en Ene. 29/15 (9:22 a.m.)

Atacan norma sobre arbitramento en contratación estatal

La Corte Constitucional admitió una demanda contra el artículo 1º del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional (Ley 1563 del 2012), el cual establece que el tribunal de arbitramento debe proferir el laudo en derecho, si la controversia se deriva del desarrollo de un contrato

estatal, incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos.

Según la ciudadana, esa norma permite a los árbitros pronunciarse sobre la legalidad del acto administrativo contractual y sus efectos económicos, lo que vulnera los principios de razonabilidad y proporcionalidad y el derecho al debido proceso, porque el juez natural es la jurisdicción administrativa.

Así, la disposición acusada viola la Carta Política, al asignarle a la justicia arbitral la competencia para definir asuntos no susceptibles de transacción (demandante: Bertha Suárez Giraldo). (Corte Constitucional, Demanda D-10552, 11/21/2014) Noticia generada en Ene. 28/15 (2:54 p.m.)

Frente al servicio militar Corte ampara derecho a objeción de conciencia y traza jurisprudencia para ejercer el derecho

La Corte Constitucional amparó el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio de dos jóvenes acuartelados, y trazó jurisprudencia sobre las pautas procedentes para el ejercicio del derecho.

Igualmente, reiteró que las redadas o batidas destinadas al reclutamiento y movilización de conscriptos son inconstitucionales por violar el derecho fundamental a la libertad personal.

Indica el joven que profesa la religión cristiana y que por la misma razón se declara objetor de conciencia para prestar el servicio militar. Al respecto, la Corte ha adoptado diferentes sentencias por supuestos similares a los ahora estudiados, sin que el Ejército Nacional haya implementado los correctivos necesarios para garantizar las vías institucionales dirigidas a (i) dar eficacia al derecho fundamental a la objeción de conciencia; y (ii) proscribir las redadas o batidas indiscriminadas, destinadas a la conducción de los conscriptos para la prestación del servicio militar obligatorio; la Sala proferirá una serie de órdenes generales con el fin que los hechos que dieron lugar a las acciones de tutela acumuladas no se reiteren en el futuro.

Para el Alto Tribunal, es evidente que las autoridades militares, como en el caso anterior, incumplieron con el deber de dar respuesta de fondo a la solicitud de objeción de conciencia, esta vez al amparo que ya había operado la incorporación.

Sobre el particular, debe la Corte resaltar que el derecho a la objeción de conciencia, en tanto fundamental, tiene carácter subjetivo y permanente, por lo que no se agota al momento de la incorporación, siendo por ello plenamente posible que se exprese en cualquier etapa del trámite de inscripción, incorporación y prestación efectiva del servicio militar.

CorteConstitucional-T-2014-N0455 (T-3936861) Sentencia 2014/07/07

Este es el fallo que permite la adopción conjunta por parte de homosexuales

La Corte Constitucional publicó la sentencia de unificación que permitió la adopción de los hijos de la persona con quien se conforma una unión homosexual. Según el fallo, el hecho de que la pareja sea del mismo sexo no es un argumento que pueda ser usado por el Estado para declarar la improcedencia de la solicitud de adopción, sin que esto impida exigir y evaluar los presupuestos constitucionales y legales. De hecho, negar la adopción con base en el carácter homosexual de la pareja genera un déficit de protección del menor que amenaza gravemente sus derechos, destacó.

No obstante, la corporación señaló que las autoridades pueden terminar anticipadamente dicho trámite si advierten el incumplimiento de tales requisitos. Por otra parte, explicó que, en ese caso, el cálculo del tiempo de convivencia mínimo de dos años entre los compañeros permanentes es la fecha de suscripción de la declaración notarial y no la que ellos consignan como inicio de su relación marital.

Los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza, Jorge Pretelt y Martha Sáchica salvaron el voto, mientras que Luis Ernesto Vargas, María Victoria Calle, Gloria Stella Ortiz y Jorge Iván Palacio lo aclararon (M. P. Luis Guillermo Guerrero). (Corte Constitucional, Sentencia SU-617, 8/28/2014) Noticia generada en Ene. 28/15 (11:23 a.m.)

Realizó: Claudia Salas Martínez
Profesional Universitario – Dirección Jurídica
Procedimiento Difusión de Información Jurídica
Alcaldía de Santiago de Cali
Teléfono oficina - 57-2 8896744
WhatsApp: 3117704301
Claudia.salas@cali.gov.co